



ANÁLISIS



En la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (Sudáfrica) de 2002, las empresas, a través del Consejo Empresarial Internacional para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), suscribieron un compromiso para fomentar la transparencia y la responsabilidad social en plena resaca de los escándalos contables. En la imagen, el entonces primer ministro británico, Tony Blair, con el presidente de Francia en ese momento, Jacques Chirac, en Johannesburgo. / Efe

El acelerón verde

De los primeros sistemas de gestión certificados con el sello ISO 14001 a las estrategias de sostenibilidad, las empresas españolas han demostrado un liderazgo medioambiental en la última década, en un contexto de miles de leyes variopintas y de constante búsqueda de la rentabilidad.

MARTA FERNÁNDEZ

Corría la primavera de 1997 y dos empresas (Cepsa, para su centro gaditano de San Roque; y Tetra Pak, para su planta de Arganda del Rey, en Madrid) se convertían en las primeras en obtener una certificación ISO 14001 en España. Por entonces, Unión Fenosa presentaba su flamante memoria medioambiental, en una práctica de transparencia verde poco común en España y que había empezado a fraguarse una década antes entre las compañías anglosajonas.

Mientras, ISO 14001 (norma creada en 1996) y Emas (Registro Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) se colaban en la jerga de los ingenieros españoles más modernos con una máxima de este estilo: *Ordene su empresa en verde*, gracias a la implantación de un sistema de gestión medioambiental.

Era el germen de la vanguardia ecológica en clave industrial, los inicios de la gestión medioambiental que, en los diez años siguientes, se propagó como un virus y el origen de un incipiente

ecomercado, que confiaba en las perspectivas de crecimiento anunciadas ya a finales de la década de los noventa y que auguraban un boom sin precedentes. Diez años después, puede que esa explosión no se haya producido y que nunca llegue a ver la luz, pero un mix de factores legales, de mercado y sociales ha impulsado la gestión verde en España.

“Terminamos los años noventa pensando en el medio ambiente como un riesgo que situaba a las empresas ante el dilema de producir o *impactar*; y finalizaremos esta década con la convicción de que quien consiga producir con menos impacto está desarrollando una interesante ventaja competitiva”, sintetiza José Luis Blasco, director de Servicios de Responsabilidad Social Corporativa de KPMG.

Y, en este giro, se ha pasado de ver el medio ambiente como una cuestión de imagen o un simple cumplimiento legal a convertirlo en un eje estratégico. “Cuando empezamos a trabajar con las empresas en 1996, había que convenecerlas de que, para proteger el me-

dio ambiente, no vale la filantropía”, recuerda Cristina García-Orcoyen, directora de la Fundación Entorno-BCSD. “Al principio, las empresas españolas asumieron la legislación europea medioam-

El balance ambiental

- Según el informe ‘Entorno 2006’, elaborado por la Fundación Entorno-BCSD a partir de los datos de 890 empresas, 6 de cada 10 compañías han realizado alguna inversión y gasto ambiental.
- El 62% de las compañías españolas asegura que ha realizado algún tipo de inversión ecológica y/o social.
- Las firmas españolas invierten en residuos (un 55%), ahorro energético y renovables (32%).
- Por autonomías, destaca el tejido empresarial de Asturias, Cantabria, Baleares y Canarias.

biental como un auténtico maza-zo”. María Artola, directora de la Fundación Biodiversidad (del Ministerio de Medio Ambiente), añade que “hace diez o quince años, el único objetivo del sector empresarial era cumplir la legislación”.

Hasta que el factor verde se vio como una ventaja diferenciadora. “Las empresas son más conscientes de que no pueden mirar a otro lado si desean mantener la capacidad competitiva”, opina Carlos Martín Peñasco, director de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Bureau Veritas Certification.

El sello ecológico

La certificación medioambiental es uno de los principales indicadores del acelerón verde. Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), a cierre de 2006, había 11.162 distinciones ISO 14001 en el mundo, un 24% más. En España, existen 11.256 certificaciones de este tipo y 856 verificaciones Emas. “El empeño de empresas e instituciones por mejorar su comportamiento ambiental ha hecho posible que mientras que, en

2000, España ni siquiera figuraba entre los seis países con mayor número de certificados ISO 14001, hoy sea el primer país europeo y el tercero del mundo”, señala Ramón Naz, director general de Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación). En cuanto a la ISO 14001, España se sitúa por detrás de Japón y China y por delante de Reino Unido e Italia. “Cuando la certificación se realiza

El 62% de las compañías españolas afirma haber realizado algún tipo de inversión ambiental o social

con rigor, es siempre una inversión con unos retornos óptimos”, indica Naz.

Aenor es una de las entidades a la que las empresas pueden acudir para someter a examen su gestión según los criterios de la ISO 14001. Hoy, este sello se ha generalizado en la industria y se extiende a negocios como hoteles, aeropuertos,



playas, hospitales o colegios.

Junto con Aenor, que ha emitido 4.318 certificados ISO 14001 y 404 Emas, en España, operan otras entidades. Entre ellas, TÜV Rheinland, que ha certificado 810 centros según ISO y 138 con Emas; y Bureau Veritas Certification, con 1.648 ISO 14001 y 26 con Emas.

Motores

Varios motores han propagado esta certificación. La exigencia de la ISO 14001 por grandes empresas a sus proveedores derivó en una fiebre entre los fabricantes de material eléctrico y electrónico, y de componentes de automoción para obtenerla. En los concursos públicos, también comenzó a exigirse. A las constructoras, les sirvió como acicate una orden del Ministerio de Medio Ambiente, que daba más puntos en las licitaciones a las compañías que tuvieran ISO 14001. Ferrovial fue la primera constructora en certificarse, en 1997.

¿Y las pymes? "Son una de las asignaturas pendientes, en España y en el mundo, ya que las herramientas existentes no logran enca-

Desarrollo 'versus' compromiso ecológico

	1990	Variación
Población española (millones de habitantes)	39,443	46%
Emissiones de gases de efecto invernadero (1990 = 100)	152,2	52,2%
Residuos urbanos generados en Madrid (kg por habitante y año)	359,16	227%

	1960	1990	2006	Variación
Consumo de electricidad en España (millones de kWh)	14.625	129.161	259.443	1.674%
Parque automovilístico por 1.000 habitantes	196	399	616	214%
Huella ecológica en España (hectárea)	2,5	5,06	6,4	256%

Fuente: Foro Nuclear, Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, WWF-Adena y Fundación Entorno-BCSD.

jar por su complejidad en las pequeñas empresas", advierte Blasco. Por su parte, Anja Oels, responsable de certificación ambiental de TÜV Rheinland Ibérica, opina que "las subvenciones han ayudado, sobre todo, a las pymes a dar el paso de la certificación ambiental".

Para ayudar a las pequeñas empresas, han surgido varias iniciativas de apoyo, algunas de ellas pro-

movidas por las Cámaras de Comercio e Industria. Así, la Cámara de Madrid creó la Línea de Consulta Ambiental (www.lineambiental.com). Por su parte, la Fundación Entorno ha desarrollado un papel decisivo para extender la gestión ecológica y la sostenibilidad en el tejido empresarial español, a través de varios programas de apoyo.

En paralelo, ha surgido un mer-

cado medioambiental. Indefinido, polifacético, heterogéneo, falto de una identidad clara y plagado de servicios variopintos, este ecosector ha vivido en la última década una auténtica depuración, que obligó a la reestructuración de algunas firmas o a su desaparición.

La transparencia ambiental ha vivido otro punto de inflexión. De

España es el tercer país con más distinciones ISO 14001, tras Japón y China, y por delante de Reino Unido e Italia

un escondido apartado en las memorias anuales de las grandes empresas (sobre todo, multinacionales), se pasó a emitir un informe anual ambiental, al que luego se incorporó el factor social, dando lugar a las memorias de sostenibilidad. Las compañías suelen redactarlas según las pautas internacionales de la iniciativa internacional Global Reporting Initiative (GRI).

ANÁLISIS

Mientras, la proliferación de leyes verdes, a una media de 500 normas por año, parte derivadas de Europa, ha impulsado la ecogestión en las empresas y las administraciones e, incluso, ha creado oportunidades de negocio.

Un ejemplo son las normas sobre residuos y la Ley de Envases, que ha dado lugar a la creación de gestores autorizados y a la puesta de marcha de sistemas integrados de gestión (SIG), centrados en envases (con Ecoembes y el punto verde como distintivo), vidrio (Ecovidrio), plásticos (Cicloplast) o medicamentos (Sigre). "Mi impresión es que las infraestructuras aún van algo por detrás de la legislación", lamenta Anja Oels.

El negocio de los residuos

Con todo, los residuos son una de las estrellas del ecomercado. Han dado lugar a negocios dispares: bolsas de plástico ecológicas; separación selectiva en el hogar; sistemas subterráneos de recogida de basura; descontaminación de envases para su reutilización; cartuchos reciclables de impresora y hasta coches ecológicos, la última moda que empieza a ser apta para todos los bolsillos. "La actividad del sector de los residuos tiende a ir en aumento, dada la ampliación de los núcleos urbanos, el crecimiento de la población y el aumento del volumen de residuos que generan", señala Javier Méndez, director de Innovación y Competitividad de la Cámara de Comercio de Madrid.

Y, poco a poco, la concienciación ciudadana va creciendo, aunque el consumidor ecológico aún sea casi una originalidad, ya que los productos verdes todavía resultan caros. Para Méndez, "existe una mayor concienciación colectiva, que ha hecho que cada vez se demanden más productos y servicios ecológicos; las empresas se intentan adaptar lo más rápidamente posible a este mercado".

Con todo, los defensores de la ecogestión defienden que las estrategias medioambientales son rentables, aunque sea a largo plazo y tras unos primeros años de esfuerzo inversor. Según el informe *Entorno 2006*, elaborado por la Fundación Entorno-BCSD, "el 62% de las empresas españolas afirma haber realizado algún tipo de inversión ambiental y/o social".

Aun así, "la presión legal sigue siendo el motivo fundamental para invertir en medio ambiente. El cambio de cultura interna necesario para ajustarse a un desarrollo sostenible todavía es incipiente", apunta Cristina García-Orcy.

Incluso ya existen índices bursátiles que incluyen a las grandes



En la imagen, el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, con la ministra Cristina Narbona. / Efe

Política pública en clave ambiental

En 1996, el Gobierno del PP (en su primera legislatura en el poder) decidió crear el Ministerio de Medio Ambiente. Estrenó esta cartera Isabel Tocino, a la que, después, sucedieron Jaume Matas y Elvira Rodríguez, antes de que, en 2004, tras ganar el PSOE las elecciones, Cristina Narbona tomara esta responsabilidad. Cuatro ministros que han desarrollado en los últimos años diversas estrategias medioambientales, centradas en responder a las exigencias comunitarias y a los problemas españoles en ámbitos como el agua, el cambio climático, los residuos, el transporte, la biodiversidad y los incendios forestales. "En España, las políticas medioambientales vienen marcadas desde la Unión Europea, puesto que gran parte de la normativa proviene de esta Administración", recuerda Javier Méndez, de la Cámara de Comercio de Madrid.

Como avance crucial en la relación con el ciudadano, María Artola, de la Fundación Biodiversidad, destaca la Ley Aarhus, aprobada en 2006. Su objetivo es garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental. "Su importancia radica en que supone un avance significativo de nuestro sistema democrático; con ella, se pretende reducir la indefensión de los ciudadanos ante decisiones que afectan al medio ambiente y, por lo tanto, a su salud y su calidad de vida". Otro de los grandes ejes estratégicos del gabinete de

Cristina Narbona durante esta legislatura ha sido el Programa AGUA, que sustituyó los planes del Ejecutivo del PP (en los que destacaba el polémico trasvase del Ebro) y que aspira a mejorar y optimizar la gestión hidrológica en España. Como protagonista destacado, reina el plan de desalación, que incluye un extenso programa de concursos públicos. Los grandes grupos de servicios (como ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) tuvieron que sustituir las previsiones de negocio planteada por el trasvase por nuevos planes derivados de la licitación de una treintena de desaladoras en el Levante español. Al mismo tiempo, demuestran su liderazgo en esta tecnología en su participación en los contratos de desalación en Emiratos Árabes, Argelia e Israel. El agua, un auténtico *oro líquido*, es uno de los negocios medioambientales más prometedoras del mundo. La OCDE estima que tiene un peso del 39% en el ecomercado mundial. Por su parte, las autonomías han desarrollado sus propias políticas medioambientales, como consecuencia de la transferencia de competencias por parte del Estado existente en esta materia. Los ayuntamientos también han avanzado en verde, con la implantación de las denominadas Agendas 21 locales, una especie de sistema de gestión ambiental para garantizar el compromiso sostenible de los municipios y para promover la concienciación entre los ciudadanos.

empresas con un comportamiento más sostenible y que, en ocasiones, demuestran elevadas cotas de rentabilidad, como es Dow Jones Sustainability Index y el FTSE 4 Good. "Un buen diseño de incentivos nos lleva a creer en los negocios enfocados en el medio ambiente como proyectos empresariales de mayor rentabilidad, en lugar de ser percibidos como próximos a la filantropía", mantiene Blasco.

Las grandes leyes

Por otro lado, la Ley sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) fue una norma revolucionaria, en 1996. "Produjo un verdadero cambio en el entendimiento de la gestión ambiental en la empresa", recuerda Blasco. Así, exige crear una ventanilla única ambiental en la Administración. Sin embargo, España trata de cumplir esta ley diez años después a marchas forzadas.

En el ámbito legal, el pasado octubre, vio la luz la Ley de Respon-

En los últimos años, se ha consolidado el liderazgo español en tecnologías limpias y gestión del agua

sabilidad Ambiental, después de ocho años de tramitación. Al plasmar el principio europeo de *quien contamina paga*, añade un régimen de responsabilidad civil a los ámbitos penal y administrativo. "Más de 5.000 industrias, 30.000 compañías de transporte de mercancías peligrosas y un millón de explotaciones agrarias tendrán que asumir la responsabilidad y hacer frente al coste económico de la reparación de desastres", indica Artola.

Con esta ley, se pretende imponer castigos ejemplares en catástrofes ambientales. Como rasgo más oscuro de la historia ecológica de España en la última década, destacan la rotura de la balsa de residuos del grupo sueco Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que afectó al Parque Nacional de Doñana; y el vertido del *Prestige*, en la Costa de la Muerte, en Galicia.

Lo que parece claro es el avance verde *made in Spain*. Si, hace una década, los líderes ambientales eran multinacionales, hoy empresas españolas internacionalizadas exportan un estilo de gestión verde; léase Acciona, Ferrovial, FCC, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa o Santander. Y nadie puede obviar el liderazgo español en el desarrollo de tecnologías limpias como las energías renovables, y la gestión del agua y residuos, así como la desalación.